

Naciones Unidas ASAMBLEA GENERAL

VIGESIMO TERCER PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 1080a.
SESION

Lunes 25 de noviembre de 1968,
a las 15.20 horas

NUEVA YORK

SUMARIO

Página

Tema 86 del programa:

Informe del Comité Especial sobre la cuestión
de la definición de la agresión (*continuación*) 1

Presidente: Sr. K. Krishna RAO (India).

En ausencia del Presidente, el Sr. Gobbi (Argentina),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

TEMA 86 DEL PROGRAMA

Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la
definición de la agresión (*continuación*) (A/7185/
Rev.1; A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1)

1. El Sr. PANCARCI (Turquía) declara que, en su opinión, el establecimiento y el mantenimiento de una paz justa y duradera dependen tanto de la supresión total de la miseria, la ignorancia y la injusticia que existen en el mundo como de la prohibición del uso ilícito de la fuerza armada.

2. Inmediatamente después de la primera guerra mundial se manifestó el deseo, no sólo de acercar las naciones y hacerlas más solidarias, sino de establecer además un sistema de defensa colectiva. En virtud del artículo 10 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, los Miembros de la Sociedad de las Naciones se comprometían a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política de todos los Miembros. Desde aquella época se han realizado esfuerzos para definir la agresión, tanto en la Sociedad de las Naciones como en la Conferencia de San Francisco en 1945 y, finalmente, dentro de las Naciones Unidas. Estos esfuerzos no siempre han dado frutos, debido principalmente a los rapidísimos progresos técnicos efectuados en la esfera militar, los cuales hacen especialmente difícil la conclusión de un acuerdo sobre la definición de la agresión.

3. Fiel a su política tradicionalmente pacifista, Turquía se ha dedicado siempre activamente a impedir los actos de agresión. Desde 1933 concertó en Londres con otros siete Estados la primera Convención sobre la definición de la agresión^{1/}, en virtud de la cual se comprometía a no recurrir a una acción bélica ni a actos de agresión. Posteriormente concertó varios acuerdos bilaterales y multilaterales, como el Tratado de amistad, no agresión, arbitraje y conciliación

firmado con Rumania el 17 de octubre de 1933^{2/}, y el Tratado de amistad, no agresión, solución judicial, arbitraje y conciliación firmado con Yugoslavia el 27 de noviembre del mismo año^{3/}.

4. Turquía tiene el propósito de seguir contribuyendo a los esfuerzos que se han emprendido para definir la agresión. Está convencida de que la definición de la agresión no sólo tendría una importancia capital para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sino que facilitaría además la aplicación del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas, y contribuiría al propio tiempo a desarrollar el derecho internacional y a desalentar a los Estados que no han renunciado todavía a cometer actos de agresión contra pueblos inocentes. En efecto, no hay que olvidar que, en el momento actual, una nación inocente de la Europa oriental es víctima de una agresión cometida por quienes, no contentos con presentarse como los defensores más intransigentes de la paz y la justicia, se erigen en campeones de la definición de la agresión.

5. La delegación de Turquía estima que la definición de la agresión debiera ajustarse, en lo relativo a su forma y contenido, a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, y su redacción no debiera ser motivo de ninguna controversia. Para evitar divergencias de interpretación como las que ha ocasionado el término "fuerza", utilizado en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, no hay que adoptar una definición demasiado amplia que, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2 de ese instrumento, pueda favorecer intervenciones en los asuntos internos de los Estados. Habida cuenta de la situación actual de las relaciones internacionales, tal vez convendría limitar la definición a la agresión armada únicamente, sin que por ello esa definición limite el poder discrecional que el Artículo 39 de la Carta confiere al Consejo de Seguridad para determinar la existencia de un acto de agresión.

6. En cuanto a la forma que debería adoptar el instrumento relativo a la definición de la agresión, tal vez sea prudente que la Asamblea General proclame tal definición en una resolución. Este procedimiento, además de ajustarse a la práctica de la Organización, tendría la ventaja de que permitiría introducir, en el momento oportuno, mejoras en la definición que se hubiese adoptado.

7. La delegación de Turquía apoyará el proyecto de resolución de las 27 Potencias (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1), pues estima, al igual que la mayoría de las

^{1/} Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, vol. CXLVII, 1934, No. 3391.

^{2/} *Ibid.*, vol. CLXV, 1936, No. 3814.

^{3/} *Ibid.*, vol. CLXI, 1935-1936, No. 3715.

demás delegaciones, que se debe prorrogar el mandato del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión.

8. El Sr. SIDDIQ (Afganistán) subraya hasta qué punto la cuestión de la definición de la agresión es importante y difícil a la vez. Los acontecimientos que se han producido recientemente en la esfera internacional han mostrado todo el interés de esa cuestión tanto para las naciones pequeñas como para las grandes Potencias. Por ello, su carácter complejo no debe desalentar los esfuerzos para la codificación y el desarrollo progresivo de un concepto muy importante de la Carta.

9. La delegación afgana estima que una definición de la agresión que obtuviese la aceptación de la mayoría de los miembros de la comunidad internacional serviría en gran medida a la causa de la paz y de las relaciones de amistad entre los Estados y contribuiría vitalmente a impedir los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad.

10. De los tres proyectos de definición que figuran en el informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, la delegación del Afganistán prefiere el de las 13 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 9), que le parece que ofrece una base excelente para el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, en vista de que el Consejo de Seguridad es el órgano principal del sistema de defensa colectiva de las Naciones Unidas y que está encargado de determinar la agresión y adoptar las medidas necesarias, la delegación afgana estima que, en cualquier definición de la agresión, conviene subrayar el poder discrecional de tal órgano.

11. Al igual que la mayoría de los miembros del Comité Especial, la delegación del Afganistán estima que la definición de la agresión debe tener un carácter mixto, basándose en ciertos criterios al propio tiempo que enumera actos concretos. También está de acuerdo con los miembros del Comité Especial que han sostenido que debe atribuirse la mayor importancia a la agresión armada o al uso directo de la fuerza. Sin embargo, la definición de la agresión debe comprender — y la delegación afgana estima que este punto tiene capital importancia — todos los métodos de uso de la fuerza, incluso la agresión económica y política. Debido a la disparidad incesantemente creciente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, los primeros están en condiciones de ejercer presiones sobre los Estados más débiles y de amenazar la seguridad de éstos privándoles de sus recursos económicos. Es indudable que esos actos, cuyo peor ejemplo es el bloqueo económico de los países vulnerables por su configuración geográfica, producen las mismas consecuencias que una intervención armada en los asuntos de otro Estado.

12. En la definición de la agresión también habría que tener en cuenta el principio de anterioridad y establecer una clara distinción entre la agresión armada y el derecho de legítima defensa; también habría que asimilar a los actos de agresión el uso de la fuerza contra los movimientos de liberación nacional así como las presiones de carácter económico, social y cultural que se ejercen sobre esos movimientos.

13. Por todos estos motivos, la delegación del Afganistán, comprendiendo la importancia de la cuestión y el hecho de que las circunstancias son favorables para la prosecución de los trabajos del Comité Especial, apoyará el proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1.

14. El Sr. KOSTOV (Bulgaria) estima que la larga historia de la cuestión de la definición de la agresión es demasiado conocida para que sea necesario detenerse mucho en ella. Se limitará a recordar que, desde 1933, la Unión Soviética propuso un proyecto de convención sobre la definición de la agresión con objeto de contrarrestar las maquinaciones de las fuerzas de agresión imperialistas, y que, en su sexto período de sesiones, la Asamblea General consideró que era posible y conveniente, con el fin de garantizar la paz y la seguridad internacionales, determinar la agresión por sus elementos constitutivos (véase resolución 599 (VI) de la Asamblea General. A causa de las maniobras de los adversarios de esa definición, la cuestión había desaparecido prácticamente del programa de la Asamblea desde su duodécimo período de sesiones. Lejos de desarmarse, los países aludidos se esfuerzan ahora por hacer fracasar un examen eficaz y constructivo de la cuestión y recurren para ello a ataques burdos e indignos contra los países socialistas, utilizando procedimientos propios de la guerra fría. La delegación de Bulgaria no pierde la esperanza de que se abandonen esas tentativas y que sea posible así continuar una labor útil y fructífera para responder a los deseos de la gran mayoría de los Estados Miembros.

15. A juicio de la delegación búlgara, una definición que se apoyase en criterios científicos y abstractos e indicase de manera clara y concreta los actos de agresión más característicos y peligrosos podría desempeñar un papel preventivo en la situación internacional actual. Por supuesto, esa definición no podría tener una fuerza mágica ni bastar por sí sola para impedir un acto de agresión concreto. Pero esta crítica se podría formular en relación con cualquier principio o cualquier norma del derecho internacional. Sin embargo, nadie puede afirmar en serio que la definición de la agresión no ha de contribuir al fortalecimiento de la legalidad internacional y al establecimiento entre los Estados de reglas de conducta que excluyan la violencia y la agresión como instrumentos de política nacional.

16. Al igual que la delegación de México, la delegación de Bulgaria estima que el proyecto de propuesta de las 13 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 9) representa una aportación positiva, puesto que refleja los puntos de vista de países que, por pertenecer a continentes y grupos regionales diferentes, siguen diversas escuelas de pensamiento en materia de derecho internacional. Es cierto que ese proyecto no está libre de graves fallas e insuficiencias, pero el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión las podrá subsanar cuando reanude su examen. De momento, la delegación búlgara se limitará a formular algunas observaciones de carácter general.

17. En primer lugar, la definición debiera ajustarse estrictamente a los términos de la Carta y, para evitar equívocos, tomar como punto de partida las dis-

posiciones del Artículo 39 de dicho instrumento, según las cuales incumbe exclusivamente al Consejo de Seguridad la adopción de medidas en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Esto equivale a decir que deberá mantenerse rigurosamente el poder discrecional del Consejo de Seguridad.

18. En segundo lugar, la definición de la agresión será más eficaz si se basa en un criterio objetivo que permita distinguir más fácilmente entre agresión y legítima defensa. Se trata del principio muy conocido de la anterioridad, según el cual es agresor el Estado que recurre a la fuerza en primer lugar. A pesar de las opiniones adversas que se han mantenido ante la Sexta Comisión, no parece que haya ningún otro principio objetivo que pueda reemplazarlo. Al mismo tiempo, cualquier definición de la agresión deberá tener en cuenta el principio de la legitimidad del uso de la fuerza por los pueblos sometidos a la dominación colonial en la lucha que llevan a cabo para su liberación e independencia.

19. Por último, convendría sustituir el texto actual, vago e impreciso, del párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de propuesta de las 13 Potencias por una fórmula más clara y rigurosa que tipifique la agresión como crimen grave contra la paz y la humanidad.

20. En cuanto a los actos que conviene enumerar, se podría o bien elaborar una definición que abarcara toda forma del uso de la fuerza contra la población o el territorio de un Estado, o bien definir en primer lugar "la agresión directa o armada" y emprender seguidamente la definición de la agresión indirecta. Si, como parece, la opinión general se inclina por esta segunda solución, la delegación de Bulgaria no encontrará ningún inconveniente en ella.

21. La delegación búlgara confiaba sinceramente en que sería posible terminar la elaboración de la definición de la agresión antes de fines de 1968, y por eso apoyó el proyecto de resolución que la Unión Soviética había presentado al efecto en el Comité Especial. Deplora que no haya podido ser así debido a las dificultades técnicas que ha expuesto la Secretaría. Votará por ello en favor del proyecto de resolución de las 27 Potencias (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1), a fin de que el Comité Especial reanude sus trabajos lo antes posible en 1969.

22. El Sr. CORNER (Nueva Zelanda) observa que, como era de esperar, la Sexta Comisión está tan dividida como lo estuvo el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión. Se sigue afirmando que la definición de la agresión servirá tanto para desalentar a un posible agresor y permitir que la opinión pública identifique con más facilidad los actos de agresión como para orientar a los órganos de las Naciones Unidas, especialmente al Consejo de Seguridad, cuando tengan que determinar si, en un caso concreto, ha habido agresión según el Artículo 39 de la Carta. La delegación de Nueva Zelanda opina que ni el informe del Comité Especial ni el debate en curso permiten esperar que se puedan lograr esos dos objetivos con los esfuerzos realizados para definir la agresión. El único punto en el que todo el mundo está de acuerdo es que la definición de la agresión carecerá de utilidad si no tiene el apoyo de la gran

mayoría de los Estados Miembros, entre ellos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, las deliberaciones muestran que las grandes Potencias distan mucho de haber llegado a un acuerdo. En vista de ello, es muy difícil no llegar a la conclusión de que serviría de muy poco realizar un amplio examen de la cuestión de la definición de la agresión, al menos en el momento actual.

23. Existen otros motivos por los que la delegación de Nueva Zelanda duda de la oportunidad de prorrogar el mandato del Comité Especial. En efecto, en la coyuntura actual no es nada seguro que la definición de la agresión pueda ayudar al Consejo de Seguridad a desempeñar las funciones de que está investido en virtud del Capítulo VII de la Carta. Lo que impide que el Consejo desempeñe su función principal, que consiste en velar por el mantenimiento o el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, no es la carencia de una definición de la agresión sino la incapacidad de sus miembros permanentes para actuar de concierto. En efecto, como se ha subrayado con tanta frecuencia, el Consejo de Seguridad ni siquiera está obligado a comprobar la existencia de un acto de agresión para poder ejercer los poderes que le confiere el Capítulo VII de la Carta. La existencia de una amenaza a la paz o de un quebrantamiento de la paz constituye una base igualmente válida para el ejercicio de esos poderes. Además, es interesante observar que, con motivo de las situaciones de que se ha ocupado, en vez de identificar al culpable e imponerle el castigo a que da lugar el concepto de agresión, el Consejo se ha dedicado siempre a desempeñar un papel de mediador o conciliador con objeto de restablecer la paz, aunque ésta sea frágil.

24. Por otra parte, a la delegación de Nueva Zelanda le resulta difícil creer que una definición satisfactoria de la agresión haría vacilar a los posibles agresores. A pesar de las formas nuevas e indirectas que puede adoptar la agresión, ésta se presenta siempre, en realidad, bajo el mismo aspecto clásico: un ejército importante cruza una frontera para imponer la voluntad de una gran Potencia a una pequeña nación. El mundo ha sido testigo recientemente de una agresión de este tipo realizada con flagrante desprecio del derecho internacional y de la Carta. La invasión de Checoslovaquia es el ejemplo más claro de agresión que se pueda imaginar, cualquiera que sea la definición de la agresión que sirva para juzgarla, y en particular las que preconiza la Unión Soviética.

25. En un esfuerzo por justificar sus acciones, la Unión Soviética ha presentado una nueva doctrina en virtud de la cual tendrían el derecho ilimitado de intervenir en lo que ha decidido considerar como su propia esfera de influencia. Además, esta nueva y peligrosa doctrina se ha expuesto como una doctrina de derecho internacional. Algunos oradores precedentes han citado un artículo publicado en el diario *Pravda*, el 25 de septiembre de 1968, con el título "Soberanía y deberes internacionales de los Estados socialistas". Según este artículo, las relaciones entre los Estados socialistas no se rigen por la Carta de las Naciones Unidas, de modo que las reglas fundamentales de este instrumento no se aplicarían a una gran parte del mundo, que bien podría comprender a otros países si éstos eligiesen un gobierno socialista. Pretender de este modo que la situación en Checoslo-

vaquia no es de la incumbencia de la Organización equivale a rechazar los principios fundamentales del derecho internacional en que se basa la Carta. Más aún, si un Estado que tan consecuentemente ha apoyado la causa de la definición de la agresión se comporta de ese modo, ¿qué seguridades puede haber de que cualquier definición ayudaría al Consejo de Seguridad o haría retroceder a posibles agresores? En el mes de agosto de 1968, una definición de la agresión, aunque hubiese sido de inspiración soviética, ¿hubiese tenido un efecto preventivo? ¿Habría ayudado al Consejo de Seguridad a hacer frente a la situación en Checoslovaquia? Las respuestas a todas estas preguntas son bien conocidas.

26. En realidad, la tesis de la Unión Soviética es que, debido a su propia naturaleza, es incapaz de cometer no sólo una agresión, sino ni siquiera cualquier infracción. Puede extender sus territorios y ampliar su imperio poco a poco, pero, por definición, no puede ser imperialista. Puede oprimir o desplazar a minorías y someter más pueblos a su ley, pero, por definición, es incapaz de dedicarse al colonialismo. Cuando trata con pequeños Estados, puede utilizar despiadadamente su potencia económica, pero, por definición — por su propia definición —, la Unión Soviética es incapaz de ejercer el neocolonialismo. Puede establecer discriminaciones contra ciertas personas que viven en su territorio — por ejemplo, contra los judíos —, pero, por definición — por su propia definición igualmente —, la Unión Soviética es incapaz de incurrir en la intolerancia racial o religiosa. Lo mismo ocurre con la agresión; la Unión Soviética la ha definido — y, al parecer, seguirá definiéndola — dándole el sentido que le convenga a la Unión Soviética; y se puede tener la seguridad de que el sentido en que la entenderá le permitirá calificar de crímenes los actos de otro país, pero nunca los suyos.

27. En vista de ello, y habida cuenta de que muchas delegaciones, con completa buena fe, son partidarias de que se continúe la empresa, ¿qué cabe pensar de un nuevo intento de definir la agresión? A juicio de la delegación de Nueva Zelanda, lo que es esencial no es tanto la búsqueda ilusoria de un remedio universal como un respeto mayor y una ejecución más rigurosa de las obligaciones fundamentales que han asumido los Estados al convertirse en Miembros de la Organización. La amenaza de la agresión no se evitará con la aprobación de una definición, que por otra parte no haría más que crear una peligrosa ilusión de seguridad; las naciones sólo disiparán esa amenaza mediante la buena fe y la buena voluntad que demuestren con sus actos.

28. Por estos motivos, la delegación de Nueva Zelanda estima que sería prudente que no se reanudara el examen de la cuestión mientras no se vea que se ha logrado un verdadero consenso sobre la definición de la agresión. Ese consenso no ha aparecido en el informe del Comité Especial ni durante el debate actual; por tanto, la delegación de Nueva Zelanda experimenta serias dudas acerca de la oportunidad de prorrogar el mandato del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión.

29. El Sr. ROSSIDES (Chipre), después de citar las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, principalmente las resoluciones 599 (VI) y 2330 (XXII),

subraya que cada vez se siente más intensamente la necesidad de acelerar la elaboración de una definición de la agresión. En los últimos tiempos, la situación internacional ha empeorado apreciablemente y la agresión armada directa es algo que se comete en muchas regiones del mundo, al paso que las tentativas que se hacen para justificarla se hallan facilitadas por la falta de definición. El mundo contemporáneo vive constantemente bajo el temor de un conflicto generalizado y de una conflagración nuclear, y la rebelión universal de la juventud no es, sin duda, más que una manifestación de la angustia que siente al vivir en una época que, al cabo de 23 años de haberse creado las Naciones Unidas, todavía está atormentada por el espectro del odio y de la guerra. El desorden y la anarquía que reinan en la comunidad internacional comienzan a propagarse a las sociedades nacionales y a socavar los fundamentos del orden público. Así, pues, hay que tratar de establecer con más resolución un orden jurídico equitativo en la comunidad internacional.

30. Aunque es principalmente un órgano político, el Consejo de Seguridad, que está encargado de mantener la paz, tiene una función cuasi judicial en virtud del Artículo 39 de la Carta: la de determinar el agresor. Negar al Consejo de Seguridad el auxilio de criterios objetivos que le den una definición equivaldría a privarlo del fundamento jurídico indispensable para determinar el agresor. En defecto de ese fundamento, la influencia de factores políticos y consideraciones subjetivas ha logrado a menudo paralizar su acción, incluso cuando no se ha ejercido el derecho de veto.

31. Sin tratar de manifestar optimismo exagerado acerca de los efectos que podría tener una definición sobre la prevención de la agresión, la delegación chipriota cree que una definición podría hacer retroceder a agresores eventuales. Además, la cooperación internacional que se manifestaría con un acuerdo sobre una definición generalmente aceptable tras tantos años de inercia, tendría unas consecuencias psicológicas y un valor positivo nada despreciables.

32. En Ginebra, el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión se concentró principalmente, con todo acierto, en una definición de la agresión armada, no sólo por ser la más necesaria según los términos de la Carta, sino también porque permitía soslayar las insuperables dificultades con que habían tropezado los Comités especiales anteriores en sus vanos intentos por hacer entrar en una vasta definición todos los tipos imaginables de agresión, directa e indirecta.

33. Lo que en realidad hace falta es una definición jurídica de la agresión armada directa, tal como se prevé en los Artículos 1, 39 y 51 de la Carta, así como en las disposiciones conexas de los Artículos 42 y 43. Aunque es verdad que el párrafo 4 del Artículo 2 dispone que los Estados Miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, no hay que olvidar que se emplean términos más concretos cuando se trata de medidas que la propia Organización ha de tomar. Se establece una diferencia entre una "amenaza a la paz", un "quebrantamiento de la paz" y un "acto de agresión", pues todo quebrantamiento de la paz no es, según los términos de la Carta, un acto de agresión. En efecto, cuando

se elaboró ese instrumento en la Conferencia de San Francisco, en 1945, se decidió conservar la expresión más general de "quebrantamiento de la paz" porque ésta abarcaba actos que, sin ser agresiones propiamente dichas, podían constituir medidas de coerción que representaran una amenaza para la seguridad de un Estado.

34. Huelga decir que, tanto las amenazas a la paz, como los quebrantamientos de la paz y los actos de agresión constituyen violaciones de la Carta y exigen que el Consejo de Seguridad adopte medidas. Sin embargo, hay diferencias de naturaleza y de grado entre los derechos y los deberes respectivos de las partes interesadas. El acto de agresión confiere a la víctima un derecho de legítima defensa individual o colectiva, conforme al Artículo 51 de la Carta, y crea una situación que autoriza a las Naciones Unidas a emprender, conforme al Artículo 42, la acción militar colectiva que juzgue necesaria. Se desprende claramente de ello que se necesita una definición de la agresión directa o armada para que el Consejo de Seguridad pueda desempeñar su cometido como corresponde, determinar la existencia de agresión y tomar las disposiciones pertinentes.

35. Si se piensa que desde hace ya más de 10 años se hallan en suspenso el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y la cuestión de la creación de una jurisdicción penal internacional en espera de que se defina la agresión, es evidente que ha de acometerse con todo empeño la elaboración de tal definición.

36. Finalmente, la oportunidad de una definición de la agresión en el mundo contemporáneo ha quedado asimismo demostrada por la resolución 255 (1968) aprobada por el Consejo de Seguridad el 19 de junio de 1968, que hace extensiva a las Potencias no nucleares la garantía contra la agresión nuclear. En las diversas observaciones que se hicieron al discutirse ese proyecto de resolución se señaló que, sin una definición de la agresión, las garantías del Consejo de Seguridad no podían ser de gran utilidad. Hay que esperar que las Potencias nucleares se sientan alentadas a ponerse de acuerdo en una definición de la agresión, habida cuenta del valor que esa definición daría a dichas garantías.

37. A juicio de la delegación chipriota, los trabajos del Comité Especial en Ginebra fueron constructivos y sus deliberaciones se desarrollaron con espíritu de comprensión y de cooperación mutua. Testimonio de ello son los proyectos de declaración que se presentaron, entre ellos el de las 13 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 9), que representaban a cuatro continentes, que puede considerarse como un éxito de cooperación en la esfera de la definición de la agresión. Es lamentable que, por falta de tiempo, no se pudiera examinar y debatir útilmente ese proyecto. Como estima que el Comité Especial debe continuar activamente sus trabajos para llevar a cabo su tarea y presentar a la Asamblea General un proyecto de definición que sea generalmente aceptable, la delegación chipriota se ha asociado a otras 26 delegaciones para presentar un proyecto de resolución (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1) en el que se recomienda que se prorrogue el mandato de dicho Comité. Espera que

ese proyecto de resolución merezca el apoyo unánime de la Sexta Comisión.

38. El Sr. PAVIČEVIĆ (Yugoslavia) advierte que la mayoría de los miembros de la Sexta Comisión estiman posible definir la agresión y que todos los Estados tienen interés en que la definición prevista pueda ser ampliamente aceptada y se funde en la Carta. No creemos que la definición vaya de por sí a eliminar la agresión ni que constituya una finalidad en sí misma. Debe servir de medio para tratar de eliminar la agresión. Con ella, se ejercería una presión moral y política sobre los agresores en potencia, cualesquiera que fueran. Además, el propio proceso de definir la agresión ya surtiría ese efecto. En lo que respecta a la posibilidad de llegar a un resultado positivo en los trabajos emprendidos, no hay que sacar conclusiones negativas de fracasos anteriores, pues la comunidad internacional se ha visto acrecentada, desde la época de la Sociedad de las Naciones, con gran número de nuevos Estados cuya seguridad quedaría reforzada con la solución del problema. En la esfera del desarrollo del derecho internacional también la situación ha cambiado y la elaboración de la definición de la agresión completaría felizmente la formulación de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. El hecho de que se haya recurrido cada vez con mayor frecuencia al uso de la fuerza en todas sus formas para imponer a Estados intereses que les son extraños y socavar su independencia milita firmemente en favor de una renovación de los esfuerzos para definir la agresión.

39. Tenemos plena conciencia de que la solución definitiva de esta cuestión depende en grado sumo de la actitud de respeto absoluto de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular de las grandes Potencias, ante los principios de la Carta y, principalmente, ante el principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y el de la no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otros Estados; es decir, que depende de cómo actúen dada la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales que, en virtud de la Carta, les corresponde.

40. La delegación yugoslava desea volver a subrayar que su dedicación a la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas es completa, pues está firmemente convencida de que sólo se puede luchar eficazmente contra la agresión y la fuerza en las relaciones internacionales si esos principios se respetan y aplican plenamente, sin excepción alguna, en las relaciones entre todos los Estados, grandes y pequeños, de dentro de los bloques y fuera de éstos y sean cuales fueren las diferencias sociopolíticas o económicas existentes entre ellos.

41. La delegación yugoslava en el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión estimó, al igual que la mayoría, que convenía tratar en primer lugar de la agresión armada por ser la que presentaba peligros más graves y que los otros aspectos de la agresión podían abordarse ulteriormente. Con todo, la oportunidad de incluir la agresión armada indirecta en la definición de la agresión armada sigue siendo discutible. A ese respecto, la fórmula propuesta en el proyecto de las 13 Potencias (véase

A/7185/Rev.1, párr. 9) podría brindar una solución, como se subrayó en la 1079a. sesión anterior. Por otra parte, se convino en que la definición de la agresión no debía menoscabar los poderes discrecionales de los órganos competentes de las Naciones Unidas, y en particular los del Consejo de Seguridad para la determinación de la existencia de una agresión; debía servir únicamente de pauta a dichos órganos, lo que ofrecería la ventaja de la flexibilidad, al mismo tiempo que introduciría nuevos elementos en el sistema de seguridad colectiva establecido por la Carta. La delegación yugoslava se ha asociado a muchas delegaciones más que se han creído en el deber de afirmar que el derecho de legítima defensa no debe servir de pretexto para ninguna violación de la Carta.

42. Para Yugoslavia, que figura entre sus autores, el texto de transacción de las 13 Potencias constituye una base sólida para elaborar una definición capaz de lograr amplia adhesión. El Sr. Pavićević subraya la importancia de la enmienda de la República Árabe Unida y el Sudán (*ibid.*, párr. 10); y está persuadido de que la idea expuesta en la segunda parte de esa enmienda encontrará lugar en la futura definición. Si se parte de la hipótesis de que la ocupación del territorio de un Estado extranjero constituye agresión, la resistencia del pueblo al invasor representa efectivamente una resistencia a la agresión. De la misma manera, si queda entendido que el hecho de impedir a un pueblo el disfrute del derecho a la libre determinación entra dentro del marco de la agresión, la lucha legítima de los pueblos coloniales se encuentra asimilada a la resistencia a la agresión, resistencia que las Naciones Unidas deberán apoyar plenamente.

43. La delegación yugoslava, habida cuenta de los resultados provisionales obtenidos por el Comité Especial y de la voluntad de la mayoría de las delegaciones de proseguir los trabajos emprendidos, cree que el proyecto de resolución de que es coautora (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1) debería ser adoptado por la Sexta Comisión. Espera que, cuando se reanuden los trabajos en el Comité Especial, se tomen debidamente en consideración las observaciones y las recomendaciones que se han hecho ante la Sexta Comisión con respecto al proyecto de las 13 Potencias.

44. El Sr. OMBERE (Kenia) dice que su delegación se felicita del trabajo realizado por el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión y que se va a limitar a hacer unas cuantas observaciones preliminares sobre los principios indicados en el informe, principios que, en conjunto, está dispuesta a suscribir. Si bien la formulación de una definición de la agresión debe fundarse principalmente en elementos jurídicos, hay que tomar en cuenta asimismo los hechos concretos de la vida internacional. Tampoco hay que olvidar que la definición de la agresión es necesaria por razones políticas, dado que existen tensiones internacionales debidas a la política de agresión de los Estados imperialistas y colonialistas.

45. La delegación de Kenia está a favor de una definición de la agresión que sea, a la vez, de carácter general y de carácter enumerativo, pues ello le conferiría flexibilidad y apartaría toda restricción. Por otra parte, desearía que la definición fuera bastante amplia para abarcar, además de la agresión directa,

los actos de agresión indirectos como el apoyo prestado a bandas armadas de un Estado que opera contra otro Estado, el sabotaje, el terrorismo y la subversión, así como la agresión política, social, económica e ideológica. Estima que las disposiciones que los pueblos subyugados o colonizados están tomando para liberarse se han de considerar como legítimas, en aplicación de la Carta; que todo uso de la fuerza para impedir a un pueblo dependiente que ejerza su derecho inmanente a la libre determinación, conforme a las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, constituye una violación de la Carta y que no hay que considerar como acto de agresión una acción encaminada a rechazar a un invasor y a resistir a unas fuerzas de ocupación.

46. Apoya la recomendación del Comité Especial de que este órgano reanude sus trabajos lo antes posible, y, por ello, se ha asociado a las delegaciones que han presentado conjuntamente el proyecto de resolución A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1. Se reserva el derecho de volver a intervenir en el debate si es menester.

47. El Sr. TENA (España) sólo se propone señalar diversos puntos para precisar la posición de la delegación de su país, que ya se expuso en detalle en los debates del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión y de la que se da cuenta en el informe.

48. Ante todo, la delegación española se felicita de que haya ganado terreno la idea de la conveniencia de definir la agresión y de que las voces discrepantes sean cada vez menos.

49. En segundo lugar, celebra el eco generalmente favorable que ha obtenido la propuesta de las 13 Potencias (A/7185/Rev.1, párr. 9), entre las que figuraba España. Se trataba de buscar una fórmula aceptable para la mayoría de los países, grandes y pequeños, y compatible con el Artículo 39 de la Carta en lo referente a los poderes del Consejo de Seguridad para determinar la existencia de una agresión y aplicar las medidas pertinentes al amparo de los Artículos 41 y 42. La definición de la agresión ha de fundarse, en último término, en la conciencia jurídica de la comunidad internacional, a la que precisamente se trata de servir. La acción paralizadora de ciertas Potencias no cabe en este terreno y la realidad del desarrollo progresivo de los principios de derecho internacional muestra que son los pequeños países los que, a costa de tenaces esfuerzos, han hecho tomar carta de naturaleza a ideas que en principio eran inaceptables para los países favorecidos por el *statu quo*. La delegación española no niega por ello la importancia de obtener el asentimiento de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para la definición que se elabore y por ello ha escuchado con especial satisfacción la declaración hecha en la 1078a. sesión por el representante de Francia.

50. En tercer lugar, el Sr. Tena subraya que la propuesta de las 13 Potencias salva los graves inconvenientes que aparejaría la adopción de una definición incompleta, tendenciosa u oscura. La fórmula propuesta de tipo mixto es a la vez descriptiva y enumerativa, sin pretensiones restrictivas. Además, está limitada de momento al aspecto más caracterís-

tico de la agresión, es decir, la agresión armada. En los debates del Comité Especial, la delegación española manifestó su preferencia por una fórmula de carácter comprensivo y elástico que tuviera en cuenta el menoscabo de la integridad territorial y la independencia política de los Estados que representan los siguientes supuestos: las bases militares mantenidas en el territorio de un Estado contra su voluntad y que suponen una amenaza contra su seguridad; la violación de las fronteras de un Estado, su espacio aéreo o sus aguas jurisdiccionales; y las proclamações de soberanía sobre una parte o la totalidad de su territorio nacional basados en la existencia de una situación de hecho impuesta. Al parecer de la delegación española, el texto de las 13 Potencias no abarca todos esos elementos pero representa una primera etapa y la definición se podrá completar más adelante.

51. En cuarto lugar, la delegación española es partidaria de la enmienda (*ibid.*, párr. 10) al proyecto de las 13 Potencias y le dará formalmente su apoyo en el momento oportuno. La enmienda tiene la ventaja de dar mayor claridad al texto propuesto, al suprimir las palabras "directo o indirecto", con lo que, además, se toman en cuenta las objeciones formuladas por varias delegaciones. Por otra parte, le parece posible aprobar la adición del nuevo párrafo relativo a la garantía del derecho de libre determinación, que se propone en tal enmienda.

52. Para terminar, el Sr. Tena indica que la delegación de su país, al participar con 26 delegaciones más en la redacción del proyecto de resolución (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1) ha querido manifestar, como las demás, un deseo sincero de transacción. Recuerda los términos en los que el Ministro de Asuntos Exteriores de España subrayó en la Asamblea General en el actual período de sesiones que la Organización internacional debía señalarse como tarea inmediata salvar lo que tenía de más valioso, es decir, lo que permitía a los que no eran poderosos la participación en las decisiones de importancia (1697a. sesión plenaria). Para continuar los trabajos del Comité Especial, será indispensable tener en cuenta las observaciones y sugerencias hechas en la Sexta Comisión. La delegación española se reserva el derecho de volver a intervenir en el debate, de ser ello menester.

53. El Sr. LUGOE (República Unida de Tanzania) recuerda, para rechazarlos, los falaces argumentos que, en el debate sobre el proyecto que dio origen a la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, adujeron ciertos países cuyo único objetivo era obstaculizar la elaboración de una definición de la agresión. No obstante, la delegación tanzaniana ha tomado nota del optimismo manifestado en el seno del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión durante sus trabajos, que se refleja especialmente en el párrafo 109 del informe. Considera que los actos de agresión que se cometen en el Oriente Medio, Viet-Nam y el África meridional deben estimular la voluntad de todos de llegar a la definición deseada para dificultar así la acción de los agresores que quisieran encontrar una justificación. La delegación tanzaniana no cree que es indispensable que la definición prevista sea aceptable para los miembros del Consejo de Seguridad, ante todo porque la tarea del mantenimiento de la paz no incumbe exclusivamente al Consejo de Seguridad, como se desprende

del Artículo 24 de la Carta, y, además, porque el concepto del derecho de veto es un elemento lamentable del sistema previsto en la Carta, que no debe extenderse a todo lo que haga la Organización. La delegación de la República Unida de Tanzania no aceptará un concepto anacrónico de las facultades del Consejo de Seguridad y desearía que en el futuro la determinación de los actos de agresión, a la que se hace referencia en el párrafo 10 de la parte dispositiva de la propuesta de las 13 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 9), incumbe no sólo al Consejo, sino también a la Asamblea General. A este efecto, sugiere que, al reanudar sus trabajos, el Comité Especial modifique el texto de dicho párrafo para que diga lo siguiente: "Podrá considerarse que un acto distinto de los enumerados en el anterior párrafo 5, de la parte dispositiva, constituye agresión, armada o de otra índole, si los órganos competentes de las Naciones Unidas así lo declaran."

54. Por otra parte, al dar prioridad a la definición de la agresión armada, el Comité Especial no debe prejuzgar el examen ulterior de las demás formas de coacción, que pueden ser principalmente políticas y económicas. El orador agrega que su delegación no puede suscribir el argumento de que al incluir en la definición prevista esos otros aspectos de la cuestión se saldría del marco fijado por la Carta, es decir, del contexto de los Artículos 39 y 51. Señala que en el Capítulo VII de la Carta, donde se menciona la agresión junto a otros actos contrarios al mantenimiento de la paz, no se relacionan necesariamente tales actos con el uso de la fuerza y ello permite por consiguiente una interpretación amplia del término "agresión" empleado en la Carta, para incluir diversas formas de algunas violaciones de la Carta. Este punto de vista, aun si no fuera el adoptado en la Carta, seguiría siendo el de la delegación tanzaniana.

55. La Carta fue concebida para satisfacer las necesidades de la comunidad internacional y, por consiguiente, debe ser interpretada en un sentido acorde con la voluntad que la comunidad pueda expresar en todo momento. En particular, la Carta tiene que tratar como se merece a los sistemas condenados por las Naciones Unidas, como el colonialismo y el *apartheid*, que deben incluirse entre las formas de agresión. No cabe duda que los regímenes racistas de Pretoria, Lisboa y Rhodesia, con la connivencia de Gran Bretaña, han cometido actos de agresión contra los pueblos africanos. En consecuencia, debe apoyarse la enmienda (*ibid.*, párr. 10) a la propuesta de las 13 Potencias. Con todo, la delegación tanzaniana habría deseado que tras la palabra "violación" que figura al final del nuevo párrafo relativo a la libre determinación propuesto en esa enmienda, se agregaran las palabras "del Artículo 39". Estima además que debe suprimirse el párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de las 13 Potencias, ya que esta disposición no tiene cabida en el texto que se examina y se refiere más bien al tema tratado por el Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

56. Lejos de querer crear nuevas dificultades en la continuación de los trabajos del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, la de-

legación de la República Unida de Tanzania ha formulado sus observaciones con miras a favorecer la elaboración de una definición que abarque todas las situaciones resultantes de la agresión, y desea que se reserve la posibilidad de definir ulteriormente otros actos en el sentido de que constituyen formas de agresión, pues está convencida de que los agresores se mostrarán inventivos y que las Naciones Unidas deben poder denunciarlos.

57. El Sr. SIYOLWE (Zambia) opina que la importancia y la urgencia de una definición de la agresión son evidentes sobre todo para países pequeños como el suyo que son las víctimas de la agresión en todas sus formas. Los trabajos emprendidos para elaborar esta definición deben proseguirse con espíritu pragmático. La delegación de Zambia comprueba con satisfacción que esos trabajos están ahora a punto de plasmarse, mediante una transacción, en un consenso aceptable. Es preciso basarse en los hechos concretos de la vida internacional, pues, como se ha subrayado en el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, únicamente el examen de esos hechos permite apreciar los elementos constitutivos de la agresión, pero también es menester, para orientar la determinación de la agresión, formular ciertos principios a que se hace referencia en el proyecto de las 13 Potencias (*ibid.*, párr. 9). Esa es la propuesta que, a juicio de la delegación de Zambia, parece más apropiada.

58. Si bien en la elaboración de la definición de la agresión conviene tener ante todo presentes las consideraciones jurídicas, no hay que olvidar las razones políticas que hacen necesaria la definición prevista, sobre todo habida cuenta de la tirantez internacional resultante de la política de agresión seguida por los Estados imperialistas y colonialistas. El orador recuerda a este respecto que el pueblo de Zimbabwe está sometido a la ley marcial impuesta por el régimen ilegal de Smith, bajo los auspicios del Reino Unido, con desprecio de los derechos humanos y las libertades cívicas. Los africanos de Angola y de Mozambique, de Sudáfrica y de Namibia, se ven sometidos al terrorismo y la segregación en su misma patria. No cabe duda de que, además de la agresión armada, existen otros tipos de agresión directa que se denominan "apartheid", "colonialismo", "racismo" y "explotación económica".

59. Teniendo presentes estas consideraciones, la delegación de Zambia ha participado en la elaboración del proyecto de resolución (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1) encaminado a lograr que los trabajos sobre la cuestión de la definición de la agresión se reanuden lo antes posible en 1969, para poder presentar a la Asamblea General, en su vigésimo cuarto período de sesiones, un proyecto de definición adecuado y de amplia aceptación.

60. El Sr. RAMBISOON (Trinidad y Tabago) estima que el informe presentado por el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión en su período de sesiones de Ginebra es muy completo, aunque, según algunos, contiene pasajes que se habría hecho bien en omitir. Su delegación apoyó el mandato dado a ese Comité. La necesidad de llegar a una definición de la agresión parece más urgente que nunca, habida cuenta de las siniestras

realidades del mundo actual que el Secretario General de las Naciones Unidas ha señalado a la atención de los Estados Miembros en la introducción a su memoria anual (A/7201/Add.1). Ciertamente es que la definición prevista no puede reunir las virtudes de una vacuna contra la agresión, pero proporcionará elementos que permitan hacer un diagnóstico, primera etapa hacia la curación.

61. La experiencia ha enseñado que, entre las posibles clases de definición, la de índole abstracta entraña el riesgo de paralizar al órgano competente si éste se encuentra ante formas imprevistas de agresión. Sea como fuere, es evidente que resulta más fácil reconocer la agresión que definirla. Por otra parte, se afirma justificadamente que una definición enumerativa produciría efectos limitativos si no dejara cierta latitud, tanto en materia de incriminación como de exoneración. Más, en tal caso, podría resultar demasiado flexible. Además, no puede reducirse el concepto de agresión a un conjunto de situaciones de hecho, ya que entraña un juicio de valor. En tales circunstancias, la delegación de Trinidad y Tabago apoya los esfuerzos realizados para combinar los distintos sistemas a fin de formular la definición deseada.

62. Para ser aceptable, esa definición no podría consistir en una simple afirmación lógica. Es preciso además que tenga en cuenta las exigencias de las relaciones internacionales en la era moderna. La definición de la agresión debe proporcionar una base para las decisiones que hayan de tomarse en tiempos de crisis y favorecer la utilización armoniosa de las fuerzas sociales y políticas para hacer fracasar a las demás fuerzas que tienden a actuar en forma inaceptable. Así, pues, la definición debe superar las dificultades de orden ético, político y sociológico. Sobre todo, es indispensable que no se deje de incluir la agresión indirecta y sus manifestaciones más o menos insidiosas, especialmente las de índole económica, ideológica y cultural.

63. No hay incompatibilidad entre el establecimiento de una definición en que se condene la agresión, por una parte, y el uso legítimo de la fuerza conforme a las disposiciones de los Artículos 51 y 53 de la Carta, por la otra. No obstante, como ciertos Estados abusan de esas disposiciones, hay que congratularse de que el Comité Especial se haya esforzado por elaborar una lista no limitativa de los actos de agresión en que se tiene en cuenta la aplicación del Artículo 39. La delegación de Trinidad y Tabago confía en que en el futuro el Comité podrá tratar en forma más satisfactoria los difíciles problemas que plantean la agresión económica e ideológica, el principio de anterioridad, el ejercicio del derecho de legítima defensa y el principio de proporcionalidad. Por otra parte, teniendo en cuenta su posición con respecto al colonialismo, se adhiere a las disposiciones del párrafo 7 de la propuesta de las 4 Potencias que figura en el informe del Comité Especial (véase A/7185/Rev.1, párr. 8).

64. La delegación de Trinidad y Tabago apoya sin reservas la prórroga del mandato del Comité Especial.

65. El Sr. SHAHI (Paquistán) recuerda que el debate actual tiene alcance limitado, habida cuenta de que

la Sexta Comisión no examina el contenido particular de una definición de la agresión sino únicamente los esfuerzos realizados hasta la fecha y la cuestión de determinar si conviene proseguirlos. Para resolver esta cuestión es preciso plantear otra, y preguntarse en qué forma conviene orientar la definición. En las observaciones de carácter general que hace, el representante del Paquistán se propone esencialmente examinar estas dos cuestiones.

66. Es natural que el debate gire alrededor de la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, en la que se afirma que no sólo es posible sino también necesario formular una definición de la agresión. No obstante, conviene hacer antes una breve reseña de la cuestión. Su examen, que se remonta a los primeros tiempos de la Sociedad de las Naciones, ha pasado por diversas fases y ha suscitado numerosas reacciones, a veces negativas y a veces positivas. Por lo que se refiere a las primeras, el orador recuerda la célebre observación de Sir Austen Chamberlain de que toda definición de la agresión constituiría una trampa para el inocente y una advertencia para el culpable. El informe de la Conferencia de San Francisco de 1945 muestra por otra parte que la mayoría de los Estados representados en ella consideraban que una definición preliminar de la agresión rebasaba las posibilidades de la Conferencia y los propósitos de la Carta^{4/}. Cabe señalar por último la decisión que la Comisión de Derecho Internacional adoptó respecto a la cuestión en su período de sesiones de 1951^{5/}. El representante del Paquistán cita a este respecto la declaración hecha en la 93a. sesión de dicha Comisión por el Sr. Spiropoulos en el sentido de que, incluso si fuera posible elaborar una definición, ésta resultaría inútil en las situaciones complejas para cuya interpretación sería necesario aplicar simultáneamente criterios múltiples. Por otra parte, se han hecho varias tentativas para definir la agresión que indudablemente revelan una ansiedad permanente y una búsqueda de precisión. La célebre definición de la agresión propuesta por el Sr. Politis en la Conferencia de desarme de 1932-1934^{6/} fue precedida por diversos proyectos presentados por los Estados Miembros de la Sociedad de las Naciones o incluidos en varios proyectos de tratados y de protocolos. A esos textos hay que agregar los proyectos presentados en el marco de las Naciones Unidas en 1953 y 1956 y los examinados por el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión creado en 1967. Por último, independientemente de la creación del Comité Especial, la necesidad de una definición del término "agresión" fue puesta de actualidad nuevamente por la aprobación por el Consejo de Seguridad de su resolución 255 (1968) y por la reacción suscitada por dicha resolución en muchos Estados que no poseen armas nucleares. En efecto, una de las críticas he-

chas a esa importante resolución, que se refiere a las garantías de seguridad otorgadas a esos Estados, fue que en el texto se empleaba el término "agresión", que no está mejor definido que la expresión "recurso a la amenaza o al uso de las armas nucleares" que es precisa y fácilmente comprensible. Una vez más, el carácter confuso del concepto de la agresión ha obstaculizado un acuerdo internacional sobre una cuestión de importancia capital.

67. De la comparación de estos argumentos conviene sacar una conclusión sensata, a saber, que merece la pena tratar de elaborar una definición, incluso si no puede estarse seguro de la posibilidad de elaborar una definición que cuente con el apoyo total de una mayoría abrumadora de los Estados Miembros. Sin embargo, no hay que dejarse desconcertar por suposiciones completamente desprovistas de realismo. El representante del Paquistán quiere referirse en particular a la idea de que la incapacidad del Consejo de Seguridad de determinar un acto de agresión incluso cuando tal acto, de conformidad con el Artículo 39 de la Carta, ha sido indudablemente cometido, hay que achacarla a la falta de una definición aceptada. No puede negarse que el hecho se ha producido, pero ello es debido a la falta de la voluntad política necesaria por parte del Consejo y también a la atrofía provocada por la no aplicación de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta. En tales circunstancias, cabe preguntarse si es razonable prever que una definición de la agresión podría hacer que cambiara esa situación. Todo lo que cabe esperar es que, al denunciar tanto en el plano jurídico como en el político la agresión en todas sus formas, una definición puede resucitar el afán de justicia. Este resultado no sería despreciable. La existencia de una definición indicaría que se quiere desalentar esa forma particular de enfocar los conflictos internacionales de que ha adolecido tan a menudo el examen de las situaciones y las controversias de que se ha ocupado el Consejo de Seguridad. Una definición de la agresión que cuente con el apoyo general contribuirá a llamar la atención sobre el problema de la responsabilidad internacional, sobre las causas profundas de los conflictos y no sobre sus manifestaciones superficiales. Mientras el concepto de agresión siga en la penumbra, el Consejo de Seguridad corre el riesgo de continuar aplicando paliativos en lugar de curar las enfermedades de que padece la comunidad internacional.

68. Sin embargo, si se quiere alcanzar ese objetivo, no es conveniente que la definición de la agresión tenga simplemente por objeto la identificación formal de sus diversas manifestaciones. Su alcance debe coincidir con el de la amplia definición implícita en los párrafos 3 y 4 del Artículo 2 de la Carta, en conjunción con el Artículo 1 y el Artículo 51. Una definición generalmente aceptada podría, sin necesidad de modificar estas disposiciones, exponer sus propios corolarios y conferirles el matiz político y moral, si no jurídico, de las normas de la Carta. Hay que advertir a este respecto que tal parece haber sido la preocupación dominante al principio de la Sociedad de las Naciones, cuando la perspectiva requerida no se había enturbiado aún y los conceptos pertinentes no habían quedado estereotipados. En aquella época se comprendía que no era posible considerar un acto tal

^{4/} Véase *Yearbook of the International Law Commission*, 1951, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1957.V.6, vol. II), documento A/CN.4/44, párr. 148.

^{5/} Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, sexto período de sesiones, Suplemento No. 9, capítulo III, párr. 52.

^{6/} La Conferencia para la reducción y limitación de armamentos se reunió en Ginebra el 2 de febrero de 1932, bajo la presidencia del Sr. Arthur Henderson. Para una reseña de la propuesta Politis véase John W. Wheeler-Bennett, *The Pipe Dream of Peace*, Nueva York, William Morrow Company, 1935, capítulo VIII, págs. 153 a 155.

como acto de agresión sin tener en cuenta las circunstancias, la actitud de las partes con respecto a la controversia que daba origen al conflicto y su respeto de las resoluciones pertinentes de la organización internacional o de los acuerdos o tratados internacionales de que se tratare. Cuando se considera la Carta de las Naciones Unidas es absolutamente indispensable enfocarla con esta perspectiva general. Así, el párrafo 4 de su Artículo 2 no prohíbe el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza como concepto absoluto, sino relativamente, cuando está dirigido "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". Si existiesen medios colectivos de prevención y represión de las amenazas a la paz que se pudiesen utilizar y se utilizaran efectivamente, sería lógico suponer que la abstención del uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa contra un ataque armado o como consecuencia de decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta, tiene carácter absolutamente obligatorio. Dado que no existen tales medios, o que no se utilizan, sería perjudicial para los intereses de la paz la elaboración de un instrumento que permitiese llamar la atención sobre el carácter reprehensible de ciertas formas de agresión solamente y, por lo tanto, desviarla de otras formas menos fáciles de identificar pero más insidiosas y que, en definitiva, tienen consecuencias más nocivas que el simple ataque armado. La propia Carta sólo prohíbe el empleo directo de la fuerza; por consiguiente, es preciso interpretarla en el sentido de que prohíbe también el empleo indirecto de la fuerza. Refuerza este razonamiento el hecho de que la agresión no es la única forma de quebrantamiento de la paz, como se desprende del párrafo 1 del Artículo 1 de la Carta. Ahora bien, hay otras formas de quebrantamiento, consecuencia de delitos cometidos contra la paz y la seguridad de la humanidad, que pueden causar al orden internacional lesiones más graves que las formas de agresión más manifiestas; el representante del Paquistán se refiere en particular a las formas de agresión económica. Naturalmente, no se trata de intentar elaborar una definición tan completa que enumere todas las diversas formas de quebrantamiento de la paz, pues esta sería una labor imposible. No obstante, es indispensable que la definición no dé a entender que la omisión de algunos tipos de uso de la fuerza no atenúa su carácter delictivo.

69. De conformidad con la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, conviene elaborar la definición de la agresión teniendo en cuenta la situación internacional actual. Es sabido que la causa de muchos conflictos contemporáneos es el mantenimiento de regímenes minoritarios o de regímenes de usurpación o de ocupación en determinados territorios, que constituyen un obstáculo al derecho de libre determinación de las poblaciones interesadas. Estas violaciones de la Carta infringen el orden internacional y hacen peligrar la paz. A este respecto, el representante del Paquistán observa con satisfacción que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto presentado por 12 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 7), así como el párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto presentado por 4 países latinoamericana-

nos (*ibid.*, párr. 8), reconocen que todo recurso a la fuerza encaminado a impedir a un pueblo dependiente ejercer su derecho a la libre determinación, constituye una violación de la Carta. La delegación del Paquistán estima que una definición que no contenga una disposición de esta naturaleza sería contraria al párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, leído en conjunción con el párrafo 2 del Artículo 1.

70. En lo que respecta al contenido de la definición, el representante del Paquistán observa que debe ser equilibrada y no debe dar a un solo principio una importancia que pueda entrañar la exclusión de otro principio conexo igualmente legítimo. A este respecto, el orador se refiere al ejemplo del principio de anterioridad, que es indispensable equilibrar con el principio de proporcionalidad; en efecto, hay que tener cuidado de no equiparar a los actos de guerra más graves con las violaciones secundarias del principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Refuerza la importancia de esta observación la propia experiencia de las Naciones Unidas, en las que se ha abusado a veces del término "agresión" con fines de propaganda. En segundo término, la definición debería tener también por objeto delimitar, expresa o implícitamente, el alcance de la legítima defensa. El Artículo 51 de la Carta es claro a este respecto: un Estado sólo puede ejercer su derecho de legítima defensa cuando es objeto de una agresión armada. Además, este derecho está subordinado a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, convendría completar esa disposición exigiendo una proporcionalidad razonable entre el acto que constituye la agresión armada y el acto de legítima defensa con que se responde. En tercer lugar, la definición debería tener en cuenta las realidades de la época nuclear. En efecto, el Artículo 51 de la Carta fue elaborado en un momento en que no se preveía la nueva situación resultante de recurrir a la amenaza o al uso de armas nucleares. Dado que el empleo de estas armas tendría efectos tan devastadores que la víctima no podría en ningún caso estar en condiciones de ejercer su derecho de legítima defensa individual, es imperativo reconocer que el simple hecho de recurrir a la amenaza de emplear esas armas autorizaría a la presunta víctima a ejercer plenamente su derecho de legítima defensa. Por último, cuando se trata de entidades políticas cuyo estatuto en derecho internacional es objeto de controversia, el orador observa que ninguno de los tres proyectos de definición presentados en el informe del Comité Especial trata de incluirlas en el campo de aplicación de la definición; es lícito esperar que el Comité Especial examine de manera detenida, con arreglo al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, los derechos y las obligaciones de las entidades políticas que no son Estados.

71. Para terminar, el representante del Paquistán desea señalar que una definición de la agresión sólo puede alcanzar su objetivo si es aceptada por la inmensa mayoría de los Estados Miembros, y particularmente por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por otra parte, parece opinarse en forma unánime que una definición de la agresión no debe en ningún caso poner trabas al poder discrecional

conferido al Consejo de Seguridad por el Artículo 39 de la Carta de determinar la existencia de un acto de agresión; no obstante, este poder discrecional atañe únicamente a la comprobación de tal acto, y no al concepto de agresión propiamente dicho. Además, el Consejo de Seguridad no está menos obligado por las disposiciones de la Carta que los demás órganos de las Naciones Unidas. La delegación del Paquistán figura entre los autores del proyecto de resolución A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1 porque estima que el empeño de elaborar una definición aceptable de la agresión puede constituir una útil empresa colectiva. Sólo queda confiar en que el Comité Especial centrará su atención en las consideraciones jurídicas planteadas por la definición, que no solamente afectan a los intereses nacionales fundamentales sino que también atañen muy directamente a la capacidad de las Naciones Unidas para cumplir su obligación esencial en cuanto a las medidas colectivas eficaces que deberán adoptarse para reprimir los actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz.

72. El Sr. COOPER (Estados Unidos de América) observa que el elemento esencial del informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión es su tercera parte, relativa al debate, el cual consistió en una discusión general dedicada a determinado número de aspectos importantes de la cuestión, seguida de una discusión relativa a los proyectos de definición presentados. El orador recuerda que los párrafos 18 a 33, agrupados bajo el título "Utilidad de una definición de la agresión", están dedicados esencialmente al examen de acontecimientos que ponen sobre el tapete cuestiones que afectan a la paz y a la seguridad internacionales en Viet-Nam, en el Oriente Medio, en Europa oriental y en otras regiones, y que han sido incluidos en el informe a petición de una sola delegación; algunas delegaciones han lamentado este hecho, particularmente la de los Estados Unidos, la cual, no obstante, conviene en que esas observaciones, que se refieren a acontecimientos reales, son pertinentes cuando se trata de la labor de un órgano que se ocupa de definir la agresión.

73. En cuanto a los proyectos de definición presentados, el representante de los Estados Unidos se limitará a formular observaciones sobre dos de las más importantes cuestiones planteadas, dado que en las actas resumidas del Comité Especial y su informe se consignan las opiniones de su delegación. Por lo que respecta al alcance de la definición, el orador recuerda que en Ginebra se convino en que el Comité Especial no debería elaborar una definición que se refiriera a los actos de presión económica y política ni a actividades análogas que no entrañaran el uso de la fuerza en el sentido físico de la expresión. En suma, este acuerdo limitado representa una solución intermedia de tipo práctico con el fin de disimular el desacuerdo fundamental en cuanto al fondo. En efecto, para algunas delegaciones, esos actos podrían constituir desde el punto de vista jurídico actos de agresión y deberían estar incluidos en toda definición exhaustiva. La delegación de los Estados Unidos figuraba entre las delegaciones que sostenían la opinión contraria, fundándose en la tesis de que una definición no podría calificar de "agresión" una actividad que no entrañase el uso de la fuerza en el sentido del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. En se-

gundo término, no ha habido un acuerdo para excluir de la definición lo que se ha denominado formas "indirectas" de uso de la fuerza. La delegación de los Estados Unidos mantiene su opinión de que en el mundo actual sería inaceptable todo planteamiento del concepto de agresión que se refiriese a formas del uso de la fuerza distintas de la infiltración de bandas armadas, el terrorismo o la subversión. Ahora bien, ninguno de los proyectos de definición presentados en Ginebra satisface esa condición.

74. En cuanto al problema de la legítima defensa, el representante de los Estados Unidos recuerda que toda definición de la agresión debe estar conforme con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional positivo y que, por consiguiente, no debe tratar de aumentar ni de disminuir el derecho existente de legítima defensa. Pero tampoco a este respecto los proyectos de definición son completamente satisfactorios. Así, el proyecto de las 13 Potencias (*ibid.*, párr. 9) plantea, en lo que respecta a la legítima defensa, un problema íntimamente vinculado al problema de determinar si conviene incluir en la definición el modo de usar la fuerza denominado "indirecto"; del párrafo 8 de la parte dispositiva de ese texto se desprende que cuando un Estado es objeto de determinadas formas de agresión, que son muy numerosas y en la época actual quizá las más peligrosas, está obligado a hacer frente al agresor por sí solo y en su propio territorio, sin tener en cuenta la intensidad de la fuerza ilícita empleada contra él. Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos estima que este párrafo es incompatible con la Carta y duda de que los gobiernos estén dispuestos a aceptar el principio que implica. Esta conclusión se funda en la idea de que la determinación de "las medidas razonables y adecuadas" a que se refiere el proyecto de las 13 Potencias tiene un carácter puramente interno. De ello resulta que esta disposición se sale del derecho internacional y, por consiguiente, no atañe ni a una definición de la agresión ni a una enunciación del derecho de legítima defensa. No obstante, el párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de las 13 Potencias es lo suficientemente ambiguo para que quepa impugnarlo destacando precisamente que ese párrafo añadiría al derecho de legítima defensa un nuevo derecho que no estaría subordinado a las mismas normas y que los Estados podrían invocar para recurrir al uso de la fuerza contra otros Estados fuera de su propio territorio. En el párrafo 92 del informe se encuentran objeciones de ese tipo.

75. Por último, el representante de los Estados Unidos estima que no conviene precisar el derecho de legítima defensa dentro de la definición de la agresión sino en el marco del estudio del principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza cuyo examen se ha confiado al Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. En consecuencia, conviene dividir en forma inequívoca la labor entre los dos órganos de manera que los resultados de sus trabajos sean complementarios; esta es, por otra parte, la única razón de que la delegación de los Estados Unidos no se haya pronunciado en favor de la propuesta de la República Democrática del Congo encaminada a subordinar el ejercicio del derecho de legítima defensa

a los principios de la proporcionalidad y de la necesidad^{7/}.

76. El orador observa por último que la definición debería ser expresamente aplicable a determinadas entidades políticas que no son reconocidas en general como Estados o que de otro modo puedan ver impugnada su personalidad jurídica en derecho internacional, pero que están obligadas a respetar las obligaciones fundamentales impuestas por el derecho internacional en lo que concierne al empleo de la fuerza. Es necesario incluir una disposición adecuada a estos efectos si se quiere que la definición permita arreglar algunas de las situaciones potencialmente más peligrosas de Europa, África y Asia.

77. Del informe puede extraerse la conclusión de que el período de sesiones de Ginebra no consiguió atenuar las profundas divergencias de opinión existentes sino que, por el contrario, las ha puesto de manifiesto.

78. Por último, el representante de los Estados Unidos expone su opinión sobre el proyecto de resolución (A/C.6/L.733/Rev.1 y Add.1), que estudia la Comisión. Su delegación sigue poniendo en duda la utilidad de los esfuerzos encaminados a formular una definición de la agresión; estas dudas, que ya sentía en el período de sesiones de Ginebra pese a su leal participación en los trabajos del Comité Especial, no han sido disipadas en el curso del debate de la Sexta Comisión. Este escepticismo es resultado de las profundas divergencias de opinión que siguen separando a los gobiernos en esta cuestión. Sin embargo, el Comité Especial podría ir eliminando con el tiempo estas divergencias. Pero hay algo más grave: en materia de agresión, existe una discrepancia considerable entre lo que algunos gobiernos tienen a bien manifestar y la forma en que están dispuestos a actuar. Este hecho induce a poner muy en duda el interés de los esfuerzos realizados en el seno de las Naciones Unidas con el fin de formular una definición de la agresión. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la delegación de los Estados Unidos se abstendrá en la votación sobre el proyecto de resolución pero seguirá participando lealmente en los trabajos del Comité Especial.

79. El Sr. NOAMAN (Yemen) señala que una definición de la agresión permitiría poner trabas al empleo de la agresión, a la que tanto se recurre en el mundo, y afirmar la competencia del Consejo de Seguridad poniendo de relieve su función fundamental en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. En efecto, es oportuno observar que este órgano no sólo no ha podido llevar a cabo su labor fundamental sino también que tampoco ha podido eludir las maniobras que llevan a cabo las Potencias imperialistas. Es un hecho reconocido que la violencia seguirá desempeñando un papel de primera magnitud en la política mundial mientras las grandes Potencias consideren necesaria la agresión para satisfacer sus necesida-

des en perjuicio de la independencia y la libertad de los países pequeños.

80. El representante del Yemen observa que la agresión no precisa de una definición para existir, como lo muestra el ejemplo de la agresión cometida contra los países árabes por el régimen sionista de Israel, que amenaza la paz y la seguridad no sólo del Oriente Medio sino también las de todo el mundo. Es sabido que Israel no ha podido cometer por sí solo esa agresión; le ha sido preciso para ello la ayuda angloamericana, en forma de armas y de dinero. Esto indica claramente que el verdadero agresor raras veces se da a conocer y que muy frecuentemente actúa a través de intermediarios. Los agresores son los partidarios de una política imperialista o colonialista y los partidarios del apartheid. Al decir esto, el representante del Yemen se refiere igualmente a la agresión que siguen perpetrando los Estados Unidos contra su país al facilitar armas y dinero a sus marionetas para que derroquen el régimen republicano del Yemen y amenacen la seguridad de su pueblo. Por otra parte, es curioso observar cómo tratan de justificar sus actos los agresores invocando el derecho de legítima defensa. Por ello, la delegación del Yemen opina que, mientras existan políticas fundadas en la expansión, el apartheid y el neocolonialismo, la definición de la agresión, aunque llegue a adoptarse, seguirá interpretándose en interés y beneficio de las Potencias imperialistas.

81. La delegación del Yemen observa con satisfacción la labor realizada por el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión; los proyectos de declaración presentados a ese Comité representan un esfuerzo innegable con miras a satisfacer la necesidad de eliminar todas las formas de agresión. Por esto da su apoyo al proyecto de las 12 Potencias (véase A/7185/Rev.1, párr. 7), aunque crea inoportuno que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se englobe simultáneamente la definición de la agresión y el derecho de legítima defensa, pues estima que no existe ninguna relación entre la agresión cometida contra un Estado soberano y el derecho de los pueblos a la legítima defensa para liberarse de los agresores; en consecuencia, preferiría que el derecho de legítima defensa fuese objeto de un párrafo distinto. Además la delegación del Yemen estima necesario que, al establecer la distinción entre la agresión y la legítima defensa, se confieran poderes adecuados al Consejo de Seguridad para que pueda llevar a cabo su misión fundamental. Por otra parte, la delegación del Yemen es partidaria del proyecto de las 4 Potencias (*ibid.*, párr. 8). También es partidaria del proyecto de las 13 Potencias (*ibid.*, párr. 9), a reserva de la aprobación de la enmienda del Sudán y de la República Árabe Unida (*ibid.*, párr. 10). Por último, la delegación del Yemen se declara a favor del proyecto de resolución presentado por la Unión Soviética (*ibid.*, párr. 11) y de la enmienda verbal presentada por Ghana (*ibid.*, párr. 12).

82. El Sr. SECARIN (Rumania), Relator, pide a los miembros de la Sexta Comisión que le expongan su opinión sobre el contenido del informe que ha de presentar a la Asamblea General sobre el tema del programa examinado. A este respecto, el Relator señala a la atención de la Comisión la resolución 2292 (XXII)

^{7/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de sesiones, Sesiones Plenarias, 1618a. sesión, párr. 111. El principio de la proporcionalidad fue elaborado por el representante de la República Democrática del Congo en la decimotercera reunión del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, celebrada el 1 de julio de 1968, durante el período de sesiones de ese Comité en Ginebra.}

de la Asamblea General, y en particular al apartado f) del anexo a dicha resolución. El Relator no cree que esa Comisión tenga intenciones de limitar su informe a las propuestas y enmiendas presentadas, así como a las decisiones adoptadas, en vista de la enorme importancia de la cuestión. En consecuencia, propone que en el informe figure también un resumen analítico de las opiniones expuestas en el curso del debate; además, este procedimiento estaría de conformidad con la práctica seguida por la Sexta Comisión.

83. Si la Sexta Comisión aprueba su sugerencia, habrá que tener en cuenta de antemano con exactitud los gastos adicionales que ocasionaría la inclusión del resumen analítico que ha mencionado; el Relator indica que, según los datos que le ha facilitado la Secretaría, los gastos de redacción del resumen, que se compondría de unas veinte páginas, ascendería a unos 3.000 dólares.

Se levanta la sesión a las 18.25 horas.